CRÍTICA

Francisco Espinosa
Maestre

LA COLUMNA
DE LA MUERTE

El avance del ejército franquista
de Sevilla a Badajoz

FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE

La columna de la muerte
El avance del ejército franquista
de Sevilla a Badajoz

Prólogo de
Josep Fontana

CRÍTICA
Barcelona

Nada de lo que aconteció una vez puede darse por perdido para la historia.

WALTER BENJAMIN,
«Tesis de la filosofía de la historia», 3

Nada hay como la derrota para agudizar la mente del historiador.

ERIC HOBSBAWM,
Sobre la historia, p. 241

Este trabajo está dedicado a los periodistas Mário Neves, Marcel Dany, Jacques Berthet, René Brut, Jay Allen y John T. Whitaker, cuyas crónicas y fotografías permitieron conocer la matanza de Badajoz. También a la memoria de Herbert R. Southworth, luchador solitario e infatigable investigador, que nos desveló los mitos de la cruzada de Franco, entre ellos el de la *leyenda de Badajoz*.

PRÓLOGO

Este es un libro de extraordinaria importancia, que no sólo enriquece, sino que renueva en más de un sentido la historia de la guerra civil española iniciada en 1936: una historia que, a la luz de investigaciones como ésta, necesita una revisión y un replanteamiento. La columna de la muerte es el resultado de una tenaz labor de investigación realizada por un hombre, Francisco Espinosa, que ha dedicado a ella muchos años de su vida, empeñado en una búsqueda rigurosa de la verdad, establecida pueblo a pueblo y nombre a nombre. Una labor que había dado ya como fruto dos libros sobre la represión en Huelva y sobre la justicia de Queipo pero que culmina ahora con esta ambiciosa investigación sobre el avance del ejército sublevado desde Sevilla a Badajoz. Una investigación, conviene señalarlo, que ha debido realizar sin becas ni ayudas de ningún tipo, financiándola con su trabajo cotidiano, y enfrentándose en más de una ocasión al desdén, cuando no a la oposición, de los medios académicos.*

Para llegar a los resultados que se exponen en estas páginas, Espinosa ha trabajado laboriosamente en los archivos civiles y militares —y de algunos, como el Archivo General Militar de Ávila, ha sacado materiales muy valiosos sobre la forma en que Franco dirigía las operaciones a distancia—, ha puesto en juego una bibliografía en la que abundan textos de escasa difusión y ha recorrido los pueblos

* *La guerra civil en Huelva*, Huelva, Diputación provincial, 1997, 3.^a edición; *La justicia de Queipo*, Sevilla, Centro Andaluz del Libro, 2000.

para hablar con quienes conservaban la memoria de los acontecimientos, que le han proporcionado testimonios muy valiosos.

El resultado de su trabajo ilumina de un modo singular la realidad de los combates en la fase inicial de la guerra y significa, sobre todo, una aportación muy valiosa al conocimiento del alcance y la naturaleza de la represión, que no es una consecuencia de la guerra, sino una de sus razones explicativas fundamentales. Lo que ha salido a la luz, me dice el propio Espinosa, «es el golpe militar triunfante, oculto bajo la guerra civil, cuya geografía es la de las fosas comunes». Algo que debemos tener en cuenta si deseamos llegar a comprender la naturaleza misma del levantamiento de 1936.

Hay una literatura sobre la represión que ha caído con demasiada frecuencia en la trampa de dejarse llevar a considerar ante todo el número de las víctimas de la violencia de uno y otro bando. Franco tuvo el cinismo de decirle a un periodista de la United Press en julio de 1937 que «en el campo nacional las defunciones que no son consecuencia de la campaña se registran escrupulosamente con arreglo a los preceptos legales, y tan sólo se han dictado por los tribunales unas seis mil penas de muerte, mil quinientas de las cuales han sido conmutadas o condonadas». O sea que admitía unas 4.500 ejecuciones en toda España. Esta operación de enmascaramiento la siguió el franquismo hasta sus últimos años, en los libros, hoy totalmente desacreditados, del general Ramón Salas Larrazábal** cuyas cifras «exactas» se han venido abajo espectacularmente ante los resultados de nuevos estudios.****

* Declaraciones al enviado de la United Press, julio de 1937.

** Ramón Salas Larrazábal, *Pérdidas de la guerra*, Barcelona, Planeta, 1977.

*** Véanse, sobre todo, los libros de Santos Juliá, ed., *Víctimas de la guerra civil*, Madrid, Temas de Hoy, 1999 y Julián Casanova, ed., *Morir, matar, sobrevivir*, Barcelona, Crítica, 2002.

Es evidente que el tema de las cifras es importante, y nadie es más escrupuloso en este terreno que Francisco Espinosa. Lo demostró en su trabajo sobre Huelva y lleva ahora al extremo su meticulosa investigación con una nómina de víctimas de la represión de ambos bandos que, como se verá, ocupa muchas páginas de este volumen. Los datos finales que se dan en el anexo III resultan elocuentes. En una zona que contaba con 434.326 habitantes y en que los «rojos» encarcelaron a 3.291 derechistas, las cifras finales de la represión dan 243 víctimas de derechas y 6.610 de izquierdas (lo cual quiere decir, simplemente, víctimas de la violencia de la derecha). Una cifra, esta última, que sabemos que representa un mínimo, porque nadie se ocupó de registrar estas víctimas en una «causa general» —lejos de ello, lo que se ha procurado es expurgar los archivos— y porque a muchos les convenía un silencio sobre los «desaparecidos» que facilitaba el saqueo de sus bienes. La lectura de lo sucedido pueblo a pueblo, que Espinosa nos relata detalladamente, nos permitirá ver cómo se repiten las historias de unos presos de derechas que han tenido que sufrir insultos y vejaciones, como la de verse obligados a barrer las calles y regar el paseo, o que reconocen, como en Fuente del Maestro, haber sido tratados «si no con dignidad y respeto, tampoco de forma despiadada y cruel», donde toda la violencia, que dejó un total de once muertos, la practicó una columna de milicianos venida de fuera, que ya había partido del pueblo cuando entraron las tropas franquistas, lo que no impidió que se produjera una feroz represión de saqueos y violaciones, con un número de asesinatos que la tradición oral eleva a más de trescientos, pero que Espinosa, fiel a su propósito de no hacer constar más que las víctimas de las que tiene certeza, limita a 194. La justificación por una respuesta tan desproporcionada vendría dada con frecuencia con la suposición de que los «rojos» pretendían matar a los derechistas pero que, por una u otra razón, «no tuvieron tiempo» de hacerlo, o con fábulas como la de que en Feria proyectaban celebrar un banquete en el que serían

obligadas a servir jóvenes de buena familia «completamente desnudas».

Sobre cómo se intentó disimular la diferencia que había entre la violencia de uno y otro bando, atribuyendo a los «rojos» los crímenes propios, le recomiendo al lector que no pase por alto el último de los anexos de este libro, el IV, que aparece después de la larga nómina de los listados de víctimas, y que lea con atención la «Breve historia de una fotografía» que podría ser, a mi entender, el mejor colofón posible a su lectura.

Pero las cifras, con ser tan elocuentes, no lo son todo. Ni siquiera son lo esencial. Los méritos del libro de Francisco Espinosa van mucho más allá de haber establecido las auténticas proporciones de la violencia y haber desmontado los mitos sobre la toma de Badajoz. Porque más importante que las cifras es la naturaleza de la violencia, que es lo que, en última instancia, explica su desproporción.

*Lo que debería quedar claro en el estudio de la represión ejercida durante la guerra civil es que la del bando franquista no surgió como una respuesta a la del otro bando, ni fue el producto de excesos ocasionales. Los trabajos realizados en estos últimos años muestran que las clases dirigentes españolas, después de la experiencia de las huelgas de los años 1933-1934, que tuvieron una incidencia especial en el campo, y del gran miedo de octubre de 1934, estaban decididas a exterminar a los elementos articuladores de la sociedad republicana —políticos, sindicalistas, profesionales, maestros...— para impedir que volviera a repetirse un programa de transformación social como el que intentó la República.**

En el verano de 1936 las derechas españolas no trataban de enfrentarse a una amenaza revolucionaria inexistente,

* Esto se puede ver tanto en los trabajos del propio Espinosa o de Cobo Romero sobre Andalucía, como en el de J. I. Bueno Madrugá: *Zaragoza, 1917-1936. De la movilización popular y obrera a la reacción conservadora*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2000.

sino de liquidar un proyecto reformista que no aceptaban. El autor de un estudio sobre Pedro Sainz Rodríguez, publicado en 1998* —y pido que se preste atención a la fecha— enumera los abusos del régimen republicano que obligaron a hombres como este piadoso varón a promover y financiar una guerra civil sangrienta: «Se obligaba a los terratenientes a roturar y cultivar sus tierras baldías, se protegía al trabajador de la agricultura tanto como al de la industria, se creaban escuelas laicas, se introducía el divorcio, se secularizaban los cementerios, pasaban los hospitales a depender directamente del estado...». Ésa era la clase de abusos y crímenes de los «rojos» con que se justificó su exterminio.

La violencia formaba parte del proyecto de los insurgentes. Las instrucciones iniciales de Mola preconizaban «un corte definitivo, un ataque contrarrevolucionario a fondo», y dejaban claro, al propio tiempo, que su objetivo era de largo alcance: «Nunca debe volverse a fundamentar el estado ni sobre las bases del sufragio inorgánico, ni sobre el sistema de partidos (...), ni sobre el parlamentarismo infecundo y nocivo».* *

Un libro publicado en 1937 por el secretario del propio general, que la policía franquista se encargó de retirar de las librerías de Zaragoza, ilustra el contexto de estas ideas al contarnos lo que se decía en las tertulias militares en torno a Mola, donde el coronel Gavilán opinaba que «hay que echar al carajo toda esta monserga de derechos del hombre, humanitarismo, filantropía y demás tópicos masónicos», y otro interlocutor, con un sentido más práctico e inmediato, hablaba de «la limpia que hay que hacer en Madrid entre tranviarios, policías, telegrafistas y porteros».* **

* Julio Escribano Hernández, *Pedro Sainz Rodríguez, de la monarquía a la república*, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1998.

** Según los documentos publicados por José del Castillo y Santiago Álvarez en *Barcelona, objetivo cubierto*, Barcelona, Timón, 1958.

*** J. M. Iribarren, *Con el general Mola. Escenas y aspectos inéditos de la guerra civil*, Zaragoza, Librería General, 1937, p. 211.

El 31 de julio de 1936 Mola decía por los micrófonos de Radio Castilla de Burgos: «Yo podría aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer una transacción a los enemigos; pero no quiero. Quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad, y para aniquilarlos». El 28 de enero siguiente remachaba: «He dicho impondremos la paz... Éste es el momento temido por nuestros enemigos ... Tienen razón; están fuera de la ley».*

Mientras tanto en Sevilla, ABC proclamaba el primero de noviembre de 1936: «Repitamos ahora las palabras pronunciadas tantas veces por el ilustre general Queipo de Llano: del diccionario de España tienen que desaparecer las palabras perdón y amnistía». ** Queipo ya había calificado en sus bandos el alzamiento como un «movimiento depurador del pueblo español» y Pemán, antes de descubrirse demócrata de toda la vida, celebraba en sus arengas patrióticas «esa contienda magnífica que desangra a España». *** El propio Franco, como es sabido, había señalado que lo importante no era «la rápida derrota del enemigo», sino una ocupación sistemática acompañada de una «limpieza» humana a fondo.

El objetivo del golpe «depurador» estaba claro. Había que aniquilar todos los elementos de la sociedad española que habían servido para articular aquella alternativa reformista iniciada en 1931 y que el triunfo electoral de 1936 volvía a poner en marcha. Y, de paso, hacer un escarmiento con los de abajo, no sólo para «cobrarse los cinco años de república», como dirá Espinosa al tratar de encontrar algún senti-

* Julio Gonzalo Soto, *Esbozo de una síntesis del ideario de Mola en relación con el Movimiento Nacional*, Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1937, pp. 31-32.

** Citado por Espinosa en A. Braojos et al., *Sevilla, 36: sublevación fascista y represión*, Brenes, Muñoz Moya y Montraveta, 1990, p. 241.

*** Bandos y órdenes dictados por el excelentísimo señor D. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, Sevilla, Imprenta Municipal, 1937, p. 8 (23 de julio de 1936); José María Pemán, *Arengas y crónicas de guerra*, Cádiz, Cerón, 1937, p. 71.

do a los asesinatos de Zafra, sino para dar ejemplo y enseñarles la lección. El 18 de julio de 1936, el conde de Alba y Yeltes, Gonzalo de Aguilera, gran propietario salmantino, «hizo ponerse en fila india a los jornaleros de sus tierras, escogió a seis y los fusiló delante de los demás. Pour encourager les autres, ¿comprende?» —le decía a un periodista extranjero a quien le contaba la hazaña.*

Es la naturaleza de la represión, mucho más que sus cifras, por terribles que resulten éstas, lo que hace de las sangrientas matanzas de Badajoz, como se ha dicho, un anticipo de Auschwitz.

Nada tiene que ver la espontaneidad con el hecho de que una buena parte de estos crímenes no fuesen ordenados desde arriba, sino que los ejecutasen por su cuenta y riesgo los partidarios y agentes locales del nuevo régimen. De arriba vinieron la incitación y la tolerancia, que los dejó impunes incluso cuando fueron denunciados. Y eso no sólo pasó en plena guerra, que es el tiempo que estudia Espinosa, sino que siguió sucediendo mucho después.

En la propia Extremadura conocemos el caso del teniente coronel de la Guardia Civil Manuel Gómez Cantos, que el 28 de agosto de 1942 hizo fusilar por su cuenta y riesgo a 26 personas en el pueblo de Alía, sin que mediara averiguación ni juicio, que aquel mismo verano mató a vecinos de La Calera —incluyendo a un falangista que había luchado en la guerra y tenía una medalla al valor— «porque tenían que saber algo», y que en 1945 hizo fusilar a tres guardias civiles porque no habían podido hacer frente a una partida de maquis superior en número. Y que salió bien librado, ya que el único castigo que se le impuso, a instancias de las autoridades eclesiásticas, fue por no ha-

* Información de Southworth que tomo del excelente trabajo de Santiago López García y Severiano Delgado Cruz, «Víctimas y nuevo estado (1936-1940)», en José Luis Martín y Ricardo Robledo, eds., *Historia de Salamanca. V: Siglo veinte*, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 2001, pp. 219-324 (cita de p. 239).

*ber permitido que los guardias civiles se confesasen antes de ser ejecutados.**

Cuando se habla de la necesidad de superar con el olvido las heridas de la guerra civil y del franquismo se comete un error y una injusticia. Porque el olvido sólo debe producirse después de que se haya establecido la realidad de lo ocurrido y se haya hecho justicia, por lo menos en su memoria, a las víctimas. Una cosa es renunciar a la venganza, como debe hacerse, y otra muy distinta promover el olvido dando por válidas las mentiras y deformaciones con que se ocultó cuidadosamente la verdad. Hacerlo implicaría cometer una injusticia con aquellos que sufrieron persecución por haber intentado construir una España más justa y solidaria mejorando la condición de vida de los trabajadores o llevando la enseñanza y la cultura a los rincones más remotos del país: sindicalistas o maestros que cayeron asesinados por entregarse a este proyecto y que la versión oficialmente establecida considera como delincuentes merecedores de castigo. Y, más en general, con todos los que se jugaron la vida, y en muchos casos la perdieron, no por ejercer la venganza o apropiarse de un botín, sino con el convencimiento de que luchaban por la libertad y el bienestar de todos. Sólo cuando se conozcan mejor los hechos y se hayan establecido las responsabilidades de unos y otros podremos hablar de olvido.

Mientras tanto deberíamos preocuparnos de ayudar a quienes, como Francisco Espinosa, trabajan y luchan por devolvernos el conocimiento y la verdad.

JOSEP FONTANA

Diciembre de 2002

* Jesús Mendoza, «Gómez Cantos, el exterminador», en *La aventura de la historia*, I, 11 (septiembre de 1999), pp. 22-31.

ÍNDICE DE SIGLAS

AGA	Archivo General de la Administración
A/L/C/D	Armario/Legajo/Carpeta/Documento
AGM/A/S	Archivo General Militar/Ávila/Segovia
AHN/M/S	Archivo Histórico Nacional/Madrid/Salamanca
AMB	Archivo Municipal de Badajoz
ATMTS	Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo
BOP	Boletín Oficial de la Provincia
CG	Causa General
DPS	Documentación Políticosocial
DSC	Documentación sin catalogar
Exp.	Expediente
IR	Izquierda Republicana
JJSS	Juventudes Socialistas
PRR	Partido Republicano Radical
SHM	Servicio Histórico Militar
Sum.	Sumario
ZR/ZN/CGG	Zona Roja/Zona Nacional/Cuartel General del Generalísimo

AGRADECIMIENTOS

En cualquier trabajo de investigación se contraen deudas que es preciso recordar y agradecer. Éste sería el caso de Alberto Reig Tapia, Francisco Moreno Gómez, Antonio Gálvez, Luis Pla Ortiz de Urbina, Diego Monge Ruiz, Paul Preston, Juan Ortiz Villalba, Luis Castro, Antonio Miguel Bernal, Miguel Ángel Lama Hernández, Antonio Orihuela, Jaume Claret, Fernando Romero, Cayetano Ibarra Barroso y Fernando Barrero Arzak. En este mismo sentido merecen mención aparte Carlos Engel Masoliver, que puso a mi disposición lo mucho que sabe sobre el cuerpo de oficiales durante la guerra civil y varios artículos de complicada localización; Francisco Marín Torrado, al que conocí como juez de Paz de Salvaleón y que me ha ayudado más de lo que él probablemente imagine, y Manuela Martín, memoria viva de ese desconocido exilio republicano extremeño que pasando por Portugal llevó a muchos primero a Cataluña y luego a Francia. La posibilidad de llegar a ella la debo a Laureano Rodríguez Liáñez y a Gabrielle García Le Ber. En el caso de José María Lama —uno de esos buenos encuentros que la suerte depara a los investigadores— su colaboración ha sido tan intensa y constante que llamarla ayuda sería quedarse corto.

Tampoco sería justo olvidar, porque es más importante de lo que pueda parecer, el cobijo y compañía que siempre que pasé por Madrid de visita archivera me prestaron Maricarmen Zaro, Jesús Bornao y sus hijas Ana y Silvia. Por otra parte, manejar la documentación del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, cuyo estado

cuando accedimos a él no es para contarlo, fue posible sólo gracias a la ayuda de mi amigo Manolo Tapada, que desgraciadamente ya no podrá ver este libro, y a la atención del teniente jurídico Rodrigo de Lorenzo Ponce de León. Tampoco lo podrá ver Mateo Moreno *Requejo*, de cuya buena memoria e ilimitada curiosidad sobre estas cuestiones disfruté durante mucho tiempo. También debo decir que una investigación en la que ha habido que recorrer docenas de Juzgados de Paz nunca hubiera podido realizarse sin la buena voluntad de las personas encargadas de ellos, la mayoría mujeres, que me dedicaron parte de su tiempo aun fuera de su horario de trabajo. Entre las labores más ingratas de un trabajo de este tipo se encuentran sin duda las de corrección, verdadera pesadilla del investigador, aligeradas en este caso en grado sumo gracias a la inestimable colaboración de Carmen Anisa Prieto y Manuel Huertas Molina, que revisaron pacientemente todo el documento. También debo mencionar al personal del archivo fotográfico de la Hemeroteca Municipal de Sevilla, que me proporcionó todo tipo de facilidades cuantas veces allí acudí. Finalmente debo agradecer al profesor Josep Fontana su interés por este trabajo, que condujo a que el proyecto recalara finalmente en la editorial Crítica, cuyos responsables, Gonzalo Pontón y Carmen Esteban, lo apoyaron sin reservas desde el principio.

INTRODUCCIÓN

La justicia es, sin duda, la parte más sólida de la memoria.

ELIZABETH JELIN, *Las conmemoraciones*, 2002

Frente a los *lugares de memoria* existentes en algunos países europeos, una de las aportaciones españolas al gran debate sobre la memoria histórica parece ser los *lugares de olvido*, de los que *Badajoz* se ha convertido en supremo paradigma. A estas alturas la vieja plaza de toros de Badajoz —escenario de uno de esos acontecimientos-símbolo a los que aludió Pierre Vilar en su introducción al *Guernica* de Herbert Southworth— ya no existe, y en su lugar está prevista la construcción de un palacio de congresos. En un informe sobre el proyecto se lee, no sin cierta perplejidad, que la elección de la propuesta aprobada «se debe al cuidado con que se trata la historia y la memoria del lugar», lo que no deja de llamar la atención si se tiene en cuenta que, al menos en el informe, no existe la más mínima alusión a la razón por la que ese lugar es conocido en todo el mundo desde hace más de sesenta años y que no es otro que las matanzas perpetradas por el fascismo español en el verano de 1936. De no ser por este motivo, y por más original que resulte su ubicación dentro del sistema defensivo de la ciudad, la plaza de toros de Badajoz sería una más de las muchas que existen por la geografía hispana.*

* La plaza de toros y la matanza que allí tuvo lugar han sido recorda-

Este desenlace, después de tantos años de silencio y abandono, contrasta con el destino de los otros dos grandes símbolos del terror fascista que la memoria democrática conserva: Víznar y Guernica. O lo que es lo mismo, el asesinato de García Lorca —hecho asociado a la figura sanguinaria de Queipo de Llano y sus matarifes delegados—, y la colaboración del nazismo con los golpistas españoles. Resultaría impensable —aunque no por ello imposible— que la tierra donde yacen los restos del poeta granadino, un parque en la actualidad, fuera elegida para levantar un edificio público enteramente ajeno *a lo que allí pasó*. Por suerte no ha sucedido así, ya que, además de respetarse el lugar, se erigirá una obra que recuerde a los que allí yacen. Pero en esa *suerte* ha influido en gran medida el que, gracias a años de investigación tenaz y dura, sepamos qué representa Víznar y percibamos como un despropósito su desaparición. Granada contó con Ian Gibson y Guernica —además de con Pablo Picasso— con el admirable y ya clásico trabajo de Herbert Southworth, quienes dedicaron muchos años de sus vidas a desvelar lo que tanto interés había en ocultar.

Desgraciadamente nadie, salvo el último —y no a fondo—, se ocupó de Badajoz, en cuyo caso, sin embargo, se ha optado finalmente por eliminar el símbolo y su memoria colocando en su lugar algo de iguales trazas y dimensiones. Ni que decir tiene que si supiéramos de Badajoz lo mismo que de Víznar o Guernica tal cosa no hubiera pasado. Es más fácil destruir sobre la base del olvido que sobre la de la memoria. En el caso de Badajoz, digamos —retorciendo el mensaje gatopardesco— que todo debe seguir aparentemente igual para que nada permanezca. Así, cuando alguien niega o minimiza hechos como los acaecidos en Víznar o Guerni-

das en la videoinstalación *Más muertas vivas que nunca*, realizada por Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto y expuesta en el MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo) de Badajoz durante los meses de noviembre y diciembre de 2002, mientras no muy lejos se levantaba ya el futuro palacio de congresos.

ca, podemos hablar de revisionismo, pero cuando se hace lo mismo con la matanza de Badajoz estamos todavía ante la *leyenda* creada en 1937. La prohibición de la memoria primero y la apuesta por el olvido después han provocado que, todavía hoy, para negar la matanza de Badajoz lo único que haya que hacer sea menospreciar las crónicas de los periodistas que informaron de los hechos y descalificar a quienes se han servido de ellas. Tan poco hay que revisar que cabe hablar de una línea de continuidad nunca rota desde la invención de la *leyenda* hasta lo que hoy algunos —con idénticas intenciones— llaman *los sucesos de Badajoz*.

La vieja plaza de toros era la prueba visible, el escenario real de una matanza que llegó a conocerse por un error de los que la organizaron y perpetraron; una realidad histórica que sería primero silenciada y, más tarde, negada para siempre por medio de la invención y puesta en circulación de la *leyenda de Badajoz*. Ya Southworth, cuando investigaba *Guernica*, se percató de que lo que al franquismo le interesaba, más que este tipo de acontecimientos se convirtieran en un problema de crítica histórica, era que el propio problema suscitado con la negación del hecho sustituyera al acontecimiento en sí. En el caso de Badajoz esto equivaldría —como, de hecho, casi ha ocurrido— a que todavía andemos discutiendo si allí tuvo lugar o no una de las grandes matanzas del 36. Si, además, se ha expurgado previamente toda la documentación que pudiera dar luz sobre el asunto, la confusión está servida, pues a falta de documentos sólo habrá opiniones que contrastar. Pierre Vilar reproduce en su introducción al *Guernica* esta idea de Charles Morazé: «Toda prueba material de una decisión tiene tantas más posibilidades de ser sustraída de los archivos cuanto más importante sea su significación política». Y en España se ha dispuesto de varias décadas para ello. No obstante —incluso aunque no haya existido ni exista— resulta casi imposible sustraerse al deseo, a la imaginación, de que alguna vez pueda aparecer algún *documento clave* sobre lo ocurrido en Badajoz.

La *leyenda de Badajoz* surgió inmediatamente después de la matanza con el firme propósito de anular el efecto de las primeras noticias que circularon sobre ello. La estrategia inicial se encaminó a deformar todo lo relacionado con la ocupación. Para justificar la dureza de la represión había que magnificar la resistencia ofrecida y el sacrificio realizado, lo que además beneficiaba tanto a ocupantes como a defensores. Pero sólo con que se hubiera reparado —fuera cual fuera la resistencia— en que el costo humano de la operación resultó muy bajo para los ocupantes, todo el andamiaje de la leyenda se habría derrumbado, ya que la supuesta hazaña militar habría quedado reducida a vulgar carnicería. Con el tiempo se optó por la típica solución intermedia: hubo dureza pero no tanta y, en todo caso, inevitable y en proporción al costo humano de la empresa. De modo que ha sido ésta, la de la *hazaña sangrienta*, la versión que finalmente nos ha llegado, versión que además se ajusta bastante a ese *buen tono* que se ha ido imponiendo desde la transición en el sentido de que la verdad se encuentra en algún punto intermedio entre las dos memorias, la de los vencedores y la de los vencidos.

La plaza de toros de Badajoz y la matanza que allí tuvo lugar forman parte de la memoria incómoda, y su final, su transformación en aséptico palacio de congresos, demuestra simplemente —al cuarto de siglo de la muerte del dictador— que no se sabía qué hacer con ella. Evidentemente no se trataba del Alcázar de Toledo ni del Valle de los Caídos. Se ha perdido la oportunidad de contribuir a fijar la memoria democrática de un país tan escaso de ella como sobrado de la contraria, ya que con la plaza ha desaparecido también la obligada investigación oficial que hubiera habido que afrontar en caso de convertirla en un *lugar de memoria*. El primer deber de la democracia es la memoria, dejó escrito el historiador francés Pierre Vidal-Naquet, quien además proponía a los historiadores «la tarea de retirar los hechos históricos de los ideólogos que los explotan».¹ Ardua tarea sería ésta aquí. En nuestro país, donde

memoria ha sido sinónimo de rencor y olvido de reconciliación, lo entendemos de otra manera. La plaza de toros de Badajoz, que durante años fue mudo testigo del paso silencioso y cómplice de los vecinos cada aniversario del 14 de agosto, era el símbolo de la destrucción de la República y de la implantación del fascismo, y a su vez también lo era de todas las matanzas perpetradas desde Melilla a Santiago y desde Salamanca a Zaragoza. Era la representación misma no de la *guerra civil* sino del golpe militar del 18 de julio. En ella estaban contenidas todas las matanzas previas y todas las que habrían de llegar, incluidas las de la segunda guerra mundial. Lo que se ha hecho al destruirla es ponerlo todo al mismo nivel de olvido: ni historia ni memoria, nada. De ahí que podamos calificar el espacio donde se situará el futuro palacio de congresos como un *lugar de olvido*. Un caso ejemplar, muy cercano a nosotros, sería lo ocurrido en Argentina en 1998, cuando el gobierno de Carlos Ménem decidió demoler la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada), uno de los lugares de represión, y convertir el espacio que ocupaba en zona verde. No pudieron. Las organizaciones de derechos humanos se movilizaron y el proyecto se paralizó. La ESMA, como la plaza de toros, constituye un símbolo universal del terror y forma parte de la memoria democrática de la humanidad.

En esa misma dinámica que ha llevado a la demolición de la plaza, es posible que alguna vez se olvide o se difumine que el fascismo se cebó en Badajoz. Hasta no hace mucho tiempo bastaba con recorrer la ciudad —desgarrada estructura urbana— para percibir el extremo estado de desidia y abandono en que quedó sumida durante décadas, y todavía hoy, ya recuperada para la vida ciudadana, son visibles las huellas del desastre. Parecía como si el fascismo no le hubiera perdonado nunca su rebeldía. Digamos que, más que en cualquier otro caso, no es posible entender la evolución de Extremadura —más concretamente de Badajoz— sin el golpe militar del 36, y que la forma en que los golpistas implantaron allí su modelo de sociedad no tuvo parangón.

Ya sabemos que en esencia ocurrió lo mismo en todos los lugares donde la sublevación se impuso, pero es evidente que el paso del Ejército de África por las tierras del suroeste en aquellos días iniciales de la sublevación creó un fenómeno particular, una forma de terror propia que nunca volvió a repetirse. Manuel Tuñón de Lara habló acertadamente de *fascismo agrario*. Y es que, cuando se intenta hallar el origen o explicar a qué se debió aquella furia asesina que llevó a la fosa común a miles de personas en cuestión de meses, es inevitable recurrir a una imagen previa: la de aquella masa campesina —en torno a 70.000 hombres— que a las cinco de la madrugada del 25 de marzo de 1936, puño en alto y al grito de ¡Viva la República!, invadió más de 3.000 fincas extremeñas. De ello resultó que en torno a 50.000 yunteros se establecieron en unas 2.000 fincas que sumaban unas 125.000 hectáreas, situadas principalmente en los partidos de Jerez de los Caballeros, Llerena y Mérida. Desgraciadamente, pese al estudio ya clásico de Pascual Carrión o a los posteriores de Edward Malefakis y Francisca Rosique, nos faltan todavía algunas claves para comprender la historia de la reforma agraria en Badajoz, provincia en la que hablar de II República equivale prácticamente a hablar de aquella reforma frustrada. Sigue atrayendo nuestra atención el terrible panorama socioeconómico dibujado por Eduardo Cerro, poco antes de la llegada de la República en la *Revista de Estudios Extremeños*; y, más aún, el penetrante análisis que un estudioso como Julio Senador Gómez trazaba en carta personal para el diputado de Unión Republicana Miguel Muñoz González de Ocampo, a sólo unas semanas del 18 de julio del 36. Incluso los sectores del catolicismo social reconocieron que la oleada de desahucios y de subida de cánones que afectó a la población yuntera (desde que en 1935 se aprobaron las «disposiciones transitorias» de la Ley de Arrendamientos) era una de las causas del resultado de las elecciones de febrero del 36.

Desde esta perspectiva, la neutralización de la Ley de Yunteros del cedista Manuel Giménez Fernández —mues-

tra de lo que una derecha civilizada podía ofrecer en aquel momento crítico— resultó desastrosa para yunteros y jornaleros, es decir, para la inmensa mayoría de la población extremeña y andaluza. Sirva de ejemplo —citado por Francisca Rosique— el caso del propietario de Fregenal de la Sierra que desahució —él solo— a veinte familias. De ahí el decreto del tres de marzo de Ruiz Funes por el que los yunteros podían recuperar las tierras que habían trabajado, y también que el 25 de marzo los campesinos extremeños, hartos de esperar, decidieran adelantarse a la lentitud de las disposiciones legislativas. No se estaba iniciando la revolución sino la vía reformista al complejo e inaplazable problema de la tierra. Sin embargo, ya para entonces, la contrarrevolución estaba en marcha y en cada pueblo se creaban, al amparo de los principales propietarios, grupos de falangistas encargados de preparar el ambiente para el inminente golpe militar. Como han demostrado diversas investigaciones, en España —al contrario de lo que ha mantenido y mantiene la línea historiográfica para la cual la República conducía inevitablemente a la guerra— no se produjeron conflictos mayores que los de otros países europeos en la década de los treinta.² Lo verdaderamente peculiar fue que la vía democrática refrendada en las elecciones de febrero del 36 fuera abortada y arrasada con una violencia inimaginable por los perdedores de esas elecciones, que no eran otros que los sectores que se oponían al proceso político iniciado en abril de 1931. Y si la sublevación estalló para acabar con la República reformista, con las elecciones, partidos y sindicatos, la represión se dirigió contra todos aquellos que le dieron vida, pero muy especialmente contra la población jornalera. Basta con mirar los listados finales para saber qué andaban buscando los golpistas. Todo lo que se asociara a la experiencia republicana o pudiera ser relacionado con ella sería destruido.

¿A qué se reduce, pues, lo que llamamos *guerra civil* en una provincia como Badajoz a lo largo de 1936? Digámoslo claramente: a un golpe militar brutal impuesto mediante

una gran matanza y cuyo único fin era restaurar el *orden natural* perdido con la proclamación de la República. Se trataba de *meter en cintura*, por la fuerza, a una sociedad que mayoritariamente había decidido seguir por un camino similar a otras sociedades del entorno europeo. El avance de las reformas anunciadas en una provincia como Badajoz hubiera conducido inevitablemente a una sociedad más igualitaria y más justa. El objetivo no era tanto repartir la propiedad como socializar la renta de la tierra. Era cuestión de tiempo, que fue precisamente lo que las fuerzas antirrepublicanas no estaban dispuestas a conceder tras los resultados electorales de febrero del 36. La maquinaria del golpe, activada en agosto de 1932 y especialmente durante el Bienio Negro, se puso en marcha en el mismo momento en que se conocieron los resultados de las elecciones. La derecha sabía que era su última oportunidad.

Los límites cronológicos de este trabajo lo constituyen el 18 de julio, inicio del golpe militar en la Península, y el 21 de septiembre, fecha de la ocupación de Azuaga; su marco geográfico abarca la zona occidental de la provincia de Badajoz. He consultado todos los Juzgados de los partidos judiciales de Almendralejo, Olivenza, Zafra, Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, Montijo y Villafranca de los Barros; y buena parte de los de Llerena, Mérida y Badajoz. En total, unos 85, algo más de la mitad de la provincia. El relato de los hechos se ajusta, en general, a estos límites, y sólo en ocasiones los desborda. Aparte de los registros de defunciones de los Juzgados, he manejado cuatro fuentes principales: el Archivo General Militar de Ávila, el Archivo Histórico Nacional de Salamanca, el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla y el Archivo Histórico Nacional de Madrid (Causa General), de donde podrá colegirse la dependencia casi absoluta en que nos hallamos con respecto a la visión de los vencedores. Prácticamente puede decirse que ignoramos cómo vivieron aquellos he-

chos los vencidos. Esta grave carencia sólo se ve compensada por las memorias escritas y por los testimonios orales, muy escasas las primeras y de complicada localización y uso los segundos. El reto de este tipo de investigaciones consiste en indagar en los acontecimientos y hacerlos comprensibles a partir precisamente de *esa* documentación. Se corre el peligro, por ejemplo, de que nos parezca normal que en una inscripción fuera de plazo de 1978 en el Juzgado de Almedralejo se anote como causa de fallecimiento: «La pasada guerra». Las palabras no son inocentes ni neutras y las que esos documentos nos transmiten están al servicio del golpe militar y de la larga dictadura. Tampoco lo son las que nosotros usamos para exponer aquellos hechos. Como sabemos hay palabras al servicio de la memoria y palabras al servicio del olvido. Y somos nosotros los que tenemos que elegir a través de esas palabras dónde nos situamos y qué queremos transmitir.

Esta investigación demuestra que, a pesar de las muchas ocasiones en que se ha tocado el caso de Badajoz, es necesario periódicamente renovar y revisar las fuentes, pues ni todos los historiadores buscan y ven lo mismo ni, incluso, el propio investigador busca y ve siempre lo mismo. Bastará con observar lo que pasa con una *verdad establecida* como el número de bajas sufridas por las fuerzas de Yagüe en Badajoz y, más exactamente, con el sacrificio de la 16.^a Compañía de la IV bandera para comprobar con qué facilidad los errores, los tópicos y las falsedades se transmiten de generación en generación sin problema alguno. Es tan fuerte el arraigo generalizado de las leyendas fundadas por el franquismo, tan intenso el peso ideológico de la transición y está tan extendido el uso de la historia como simple discurso justificador del pasado —la historia muerta—, que habrá que soportar todavía durante un tiempo estas viejas historias —y otras nuevas— creadas en su mayor parte para ocultar o suavizar la realidad, o simplemente para hacernos creer que *pasó lo que tuvo que pasar*. En el caso de Badajoz, estos problemas afectan no sólo a cues-

tiones concretas sino a toda la operación, repetida por unos y otros en detalle y hasta la saciedad según el modelo impuesto entonces por los vencedores. Resulta muy significativo que, a pesar de que las defunciones inscritas en el Registro Civil de Badajoz a consecuencia del golpe militar han sido investigadas al menos parcialmente, nunca se hayan hecho públicas sus identidades. Es obvio que la contemplación nombre a nombre del listado de víctimas —aunque sólo represente una aproximación al fenómeno represivo— nos coloca ante la prueba irrefutable de lo que allí ocurrió a partir del 14 de agosto.

El trabajo consta de tres bloques. En el primero (capítulos I y IV) se exponen los principales acontecimientos que marcaron la vida de cada uno de los pueblos de la zona estudiada. Sin embargo, a pesar de que ello sea necesario para la comprensión de todo el proceso, plantea un inconveniente: lo que en el primer capítulo es un recorrido más o menos coherente por la ruta principal que conducía de Sevilla a Mérida, en el IV se convierte —tal como fue en realidad— en un desordenado plan de ocupación a cargo de pequeñas columnas a través de rutas secundarias. Esto dificulta su tratamiento y convierte su exposición en un reto —en parte motivado por haber primado la cronología sobre la geografía— del que he sido consciente. El segundo bloque (capítulos II y III) constituye el núcleo del trabajo y se dedica a la ocupación de la ciudad de Badajoz y a sus consecuencias. Finalmente el tercero (capítulo V) expone —además de un análisis del tratamiento de la cuestión a lo largo del tiempo— lo que hemos logrado saber de la matanza de Badajoz y, en general, de la represión en la zona estudiada. Como complemento se han incorporado una serie de anexos, unos por su valor histórico y otros por ser pruebas de la interpretación que se hace de aquellos hechos. El primero de esos anexos, el de los gastos en alimentos de las milicias, puede parecer un tanto anecdótico, pero persigue una finalidad: ofrecer una prueba razonable que permita calcular el verdadero número de milicianos que participaron en la de-

fensa de la ciudad, magnificado por todos. El segundo reúne la información que tenemos sobre los componentes de la guarnición de Badajoz. El siguiente apartado (Anexo III) ofrece y resume una serie de datos sobre cada una de las localidades estudiadas, desde la población hasta las cifras de represión. Finalmente, el último anexo, dedicado a la fotografía allí incluida y a su historia, constituye una reflexión sobre la memoria, sobre su manipulación y sobre las dificultades para encontrar los hilos que nos conducen a la restauración de la verdad. La pequeña historia de esa fotografía representa lo que, en otra escala superior, ha ocurrido con aquel golpe militar y con lo que vino después.

No quiero cerrar estos comentarios iniciales sin aludir, como ya hice en trabajos anteriores, a las dificultades sufridas en la investigación. Realmente dichos problemas aportan un *valor añadido* a estos trabajos, del que no suele ser consciente el lector y que, sin embargo, para el investigador se traduce en un enorme desgaste personal. Resulta que cuando ya hemos logrado que la mayoría de los archivos sean accesibles, los *amos de la memoria* o *gestores del olvido*, que no dejan de maquinarse, han ideado dos nuevos procedimientos para ahuyentar a los investigadores, que parece que no acabamos de enterarnos de que el ciclo histórico abierto en 1931 y cerrado en 1975 es materia reservada y protegida. Así, por ejemplo, el Archivo General Militar de Segovia —aplicándolo de manera un tanto azarosa— ha decidido que los cincuenta años prescritos por la ley para la consulta de documentos no se cuentan a partir de la fecha de los documentos sino del último documento de cada expediente («... que el expediente está formado por un conjunto de documentos con diferentes fechas y que la fecha extrema que se toma para la consulta del expediente es la del último documento», carta de 29 de mayo de 2000); y diversos organismos provinciales y regionales, al abrigo de ciertos reglamentos, impiden sistemáticamente la consulta de algunos documentos por encontrarse eternamente sin catalogar o en proceso de catalogación. Por ejemplo, el «*preferentemente* a través de los instrumentos

de descripción» que la legislación andaluza establece para la consulta de documentos representa la típica argucia que tarde o temprano acabará creando problemas al investigador. Se convendrá en que, por estos dos procedimientos, la investigación sobre nuestra historia reciente —ya de por sí escasa— puede tocar a su fin. En mi caso cabe afirmar sin exageración alguna que de haberseme aplicado esos criterios restrictivos tiempo atrás, ni la investigación que realicé sobre la guerra en Huelva ni el trabajo sobre la justicia militar en el territorio de Queipo hubieran existido.

No obstante, no debe extrañarnos que el país que permite que *desaparezca* la plaza de toros de Badajoz (y que mantiene con fondos públicos el Alcázar, el Valle de los Caídos o la Fundación Nacional Francisco Franco) carezca de una política coherente y democrática sobre el patrimonio documental. No tenemos muchas leyes a nuestro favor y, por si fuera poco, su sentido depende básicamente de quien las interpreta. Aquí cualquiera puede paralizar una investigación. La palabra que definiría esta situación, fruto de una ley ambigua y restrictiva, sería arbitrariedad. De esta forma, se corre el peligro de que los archivos —puesta a salvo la documentación delicada y alejados los investigadores que indagan en cuestiones inadecuadas— se integren como parte primordial de la red nacional de *lugares de olvido*, con larga práctica ya en resistir los embates de la memoria.

No considero exagerado decir que han sido y están siendo el empuje y las iniciativas de la gente, más que los cauces abiertos por las leyes —siempre tendentes a proteger al poder— o, en general, los proyectos de las instituciones encargadas de la transmisión del pasado, los que están consiguiendo abrir brechas de memoria en el muro de olvido que el franquismo nos legó y que la transición asumió bajo el erróneo y reaccionario criterio de que los recuerdos reabrían heridas y el silencio reconciliaba. Así se fraguó un fenómeno de negación de la memoria —algunos prefieren pensar (*pro domo sua*) que se trató de un simple aplazamiento obligado por las circunstancias—, de graves consecuencias

para la identidad colectiva y que —por más que denunciado hace tiempo— sólo ha comenzado a percibirse y a lamentarse por parte de ciertos sectores, empeñados hasta hace poco en *no mirar atrás*, cuando ya habían pasado más de veinte años desde la aprobación de la Constitución y con la derecha asentada en el poder. Como si la memoria —convertida a veces en mero instrumento de desgaste político— sólo fuera útil cuando se está en la oposición.

Sin embargo, el éxito de algunos trabajos de historia, la acogida de las diversas iniciativas de la asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE), del proyecto del Canal de los Presos en el suroeste o la asombrosa historia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) —todo ello fruto del trabajo de particulares— demuestran que la sociedad española, como era previsible, ni estaba ni está por el olvido. Ante estas circunstancias algunos de los que hasta hace poco apostaban por el supuesto silencio reconciliador se han apresurado a subirse al carro de la memoria. Sería pues el momento de recuperar el tiempo perdido. El primer paso, desde luego, por más que llegue tarde, consistiría en salvar el patrimonio documental relativo al ciclo histórico 1931-1977 que ha llegado hasta nuestros días y ponerlo al servicio de la investigación. La observación y el análisis de ese interés por la memoria, desde mediados de los noventa, y de su creciente repercusión social, llevan a pensar en sí, a pesar de lo que se ha hecho y se hace por evitarlo, no entra dentro de lo posible que sea la memoria del golpe militar, de la guerra y de la dictadura —y con ellas la de la República arrasada— la que acabe por vertebrar una verdadera memoria colectiva y democrática en nuestro país. Hay sin embargo un impedimento serio para que este proceso culmine. Por lo que respecta a la memoria, la transición, al negar la rememoración crítica del golpe militar, de la guerra y de la dictadura —y con ello la posibilidad de enlazar con la anterior experiencia democrática, la II República, cuya sola mención era considerada desestabilizadora— impidió la existencia de un hito que delimitase claramente

el tránsito del estado dictatorial al estado de derecho. En la práctica esto —unido a la amnistía de 1977, verdadera «ley de borrón y cuenta nueva» para la dictadura— supuso avallar al franquismo y su memoria, cuyos hagiógrafos siguieron campando a sus anchas, y, al mismo tiempo, cerrar los caminos que hubieran llevado a la restauración de la memoria democrática, abandonada al esfuerzo individual de quienes se negaron a asumir la política del olvido. Así, transcurridos más de veinticinco años desde la muerte de Franco, hemos avanzado, no sin grandes dificultades, en el establecimiento de la *verdad histórica* sobre el período 1931-1975, pero no se ha conseguido aún elaborar la correspondiente *verdad jurídica*, es decir, una interpretación del pasado en términos jurídicos que nos permita avanzar en el análisis y superar de manera definitiva la ambigüedad generalizada —especialmente manifiesta en el ámbito terminológico— que envuelve nuestra historia reciente.³

EL GOLPE DE QUEIPO Y EL PLAN DE FRANCO

En Extremadura teníamos una confianza enorme en la combatividad de los obreros sevillanos y por eso creíamos que dominarían la situación. El recuerdo de la Sanjurjada nos hacía abrigar esas esperanzas. Pero por desgracia, aquella confianza no tardó en convertirse en una desilusión. Es verdad que los obreros hicieron una resistencia tenaz a los sublevados pero sin armas de poco podía servirles.

OLEGARIO PACHÓN NÚÑEZ,
*Recuerdos y consideraciones de los tiempos
heroicos*, pp. 32-33

Franco transporta su ejército

A la semana del golpe militar, el 24 de julio de 1936 —una vez definida la situación general— se constituyó en Burgos la llamada Junta de Defensa Nacional, que afirmaba asumir poderes de estado. La componían los generales de División Miguel Cabanellas Ferrer y Andrés Saliquet Zumeta; los generales de Brigada, Emilio Mola Vidal, Miguel Ponte Manso de Zúñiga y Fidel Dávila Arrondo; y los coroneles de Estado Mayor Federico Montatel Canet y Fernando Moreno Calderón. Ese mismo día esta Junta Militar comunicó los primeros decretos a las comandancias militares sublevadas contra el gobierno legal de la República. En el radiograma original, entre la comunicación de la constitución de la Jun-

ta y la exposición de los decretos iniciales, había cuatro líneas tachadas, en las que podía leerse:

Esta Junta ha designado a Generales Francisco Franco como Jefe del Ejército de Marruecos y del Sur de España y Emilio Mola para Jefe del Ejército del Norte, y ha dispuesto que General Sebastián Pozas Perea cese en el cargo de Inspector General de la Guardia Civil, nombrando para sustituirlo al General Federico de la Cruz Bullosa.⁴

Puesto que se trata del radiograma enviado a Sevilla es posible que la eliminación de esas líneas se decidiera por Queipo y su Estado Mayor antes de su publicación. No debió hacerle mucha gracia al general golpista —limitado a su cargo de Inspector de Carabineros y ahora jefe de la II División— que se otorgara a Franco el mando del Ejército del Sur, mas lo cierto es que esta situación se mantuvo nada menos que hasta el 26 de agosto, cuando se nombró a Queipo «General en jefe de las fuerzas que operan en Andalucía», mientras Franco y Mola pasaban a serlo, respectivamente, de las fuerzas de Marruecos y del Ejército Expedicionario y del Ejército del Norte. Quizá esta decisión venía a solucionar roces existentes desde hacía un mes y que en el caso de Queipo, que se consideraba «General en Jefe de hecho», se tornarían en agravios permanentes. Pero esta división de los sublevados en tres ejércitos duró sólo un mes, ya que el primero de octubre, con la designación de Franco como generalísimo de todos los ejércitos, se decidió mediante el decreto n.º 1 dejar a Mola al frente del Ejército del Norte y a Queipo de Llano del Ejército del Sur. A efectos legales, pues, esto significaba que el general Queipo sólo dispuso de ejército con mando independiente entre el 26 de agosto y el primero de octubre de 1936. Sin embargo, igual que inventó una leyenda sobre la toma de Sevilla a su medida, tuvo la habilidad junto con su camarilla de crearse una imagen de independencia que —aparte de insultos y chascarrillos, su especialidad— poca base tenía.

Sobre el 23 o 24 de julio, cuando Sevilla acababa de ser ocupada por los sublevados, el general Franco envió allí al coronel Francisco Martín Moreno (Jefe del Estado Mayor del Ejército de Marruecos cuando éste estuvo bajo su mando durante el Bienio Negro) para que iniciase la organización de las tropas que habrían de marchar sobre Madrid, fuerzas que habían empezado a llegar a la Península el domingo día 19. En esos días finales de julio, Franco trataba de solucionar su gran problema: cómo trasladar sus efectivos a la Península. El día 30 de ese mismo mes, según Franco Salgado-Araujo,⁵ contaba ya con medios que le permitían transportar diariamente quinientos hombres y quince toneladas de material de guerra.⁶ Con la idea de controlar ese proceso, Franco viajó de Tetuán a Sevilla el dos de agosto. Además de organizar sus fuerzas, el general tenía otro motivo para tan rápido viaje de ida y vuelta. Queipo, el que decía haber triunfado con «quince soldaditos», amparado en que las tropas se hallaban en *su territorio*, estaba utilizando a su antojo desde el día 19 de julio los hombres que Franco había ido enviando, sin los cuales no hubiera podido jactarse a esas alturas de contar con lugares claves como Cádiz, Sevilla y Huelva. Las pérdidas producidas en esas operaciones irritaban a Franco, que animaba a Martín Moreno a que se cumplieran sus órdenes «con la máxima energía posible».

Tres días después, el cinco de agosto, pasaron de Ceuta a Algeciras ocho mil hombres y numeroso material de guerra,⁷ y al día siguiente Franco instalaba su cuartel general en plena Puerta de Jerez, en una casa palaciega cedida por Teresa Parladé. Allí, desde Sevilla, siguió con enorme preocupación, por la lentitud, los primeros pasos de las columnas que habían marchado contra Madrid. Ello se tradujo, según Franco Salgado-Araujo, en que «ordenaba con cierta violencia, cosa poco frecuente en él por su carácter tranquilo y optimista». Esa angustia se aminoró el día 14 de agosto, cuando Yagüe le comunicó que la ciudad de Badajoz había sido ocupada. A partir de ese momento, con sus columnas

celebrando la victoria en la capital extremeña, se mostró ya como jefe supremo de la sublevación tanto ante sus compañeros como ante portugueses, alemanes e italianos. Participó al día siguiente en los actos organizados en Sevilla con motivo de la reposición de la bandera monárquica y no tuvo que esforzarse mucho para destacar entre un ridículo Queipo, incapaz de poner fin a un absurdo y disparatado discurso sobre banderas, y el necrófilo Millán, que en tres ocasiones lanzó el ¡Viva la muerte!, coreado por la masa humana congregada en la Plaza Nueva. El periodista portugués José Augusto, que asistió a la ceremonia, captó perfectamente, en fecha tan temprana y en el supuesto feudo de «o general-charlista», la superioridad de Franco —«o exército é o cirurgiao que realiza neste momento a grave operacao que vai salvar a Espanha», le dijo en una entrevista que le concedió— sobre Queipo, con «a sua gargalhada fácil e chocarreira, a sua eloquência barulhenta», con quien ni se molestó en hablar.⁸ Al día siguiente, 16 de agosto, Franco partió hacia Burgos para encontrarse con Mola, quien no tardó en asumir que el jefe de aquella sublevación que tan meticulosamente había tramado era el general Franco. Diez días después, asegurada plenamente la conexión con el norte y con las diferentes fuerzas ya orientadas hacia la capital, trasladó su cuartel a Cáceres. Este proceso imparable para Franco culminaría, tras más de dos semanas de tensas reuniones en Salamanca, el 29 de septiembre, cuando la Junta Militar lo nombró Jefe del Estado y del Ejército.

Sevilla, el gran foco golpista

Sevilla es a lo largo de la República uno de los principales focos de intrigas militares, alimentado por la debilidad del Estado para acabar con sus enemigos. Lo que en el 36 concluye en el victorioso golpe de Queipo no es sino el final de un proceso que comenzó a las pocas semanas de la proclamación de la República. De fondo, un hecho clave insuficiente-

mente estudiado: la aplicación de la *ley de fugas* en julio de 1931 a cuatro obreros, operación dirigida por el capitán Manuel Díaz Criado y que, pese a ser investigada por una comisión parlamentaria, quedaría impune. Estos asesinatos, que abren un ciclo de violencia cerrado en falso por la comisión parlamentaria y, sobre todo, la desquiciada política republicana de Orden Público, destrozarán cualquier posibilidad de convivencia. No es de extrañar que un año después Sanjurjo eligiera Sevilla para llevar a cabo su golpe, cuya trama local, no sólo quedó sin castigo sino que ni siquiera se investigó. Es lógico que unos militares y civiles acostumbrados a salir bien de todas estas operaciones —a las que habría que sumar el gran ensayo general, supuestamente contrarrevolucionario, de octubre de 1934— acometieran con optimismo la preparación del golpe final precisamente en la ciudad donde tan bien les había ido.⁹ Por eso los golpistas pensaron desde un primer momento en Sevilla como base para la toma de Madrid. Contaban allí además con un hombre que, aunque siempre oculto por la sombra de Queipo, constituye el verdadero cerebro del golpe en Sevilla: el comandante de Estado Mayor José Cuesta Monereo, quien ya contaba con la experiencia del golpe de Sanjurjo y que ahora planificó la ocupación de la ciudad hasta en sus más mínimos detalles. En este caso, una vez más, una cosa es la leyenda con la que Queipo montó su *hazaña* —leyenda propiciada activamente por el propio Cuesta— y otra muy diferente la manera en la que éste y sus hombres —unos cuatro mil— se hicieron con la ciudad. Cuesta, además, contando si no con la complicidad sí con el silencio de sus jefes y compañeros —incluido el general Fernández Villa-Abrille—, fue también el que tendió los hilos de la conspiración por el suroeste. Por todo ello no es de extrañar que la caída de Sevilla se diese por segura. Martínez Bande reproduce una carta escrita desde Tetuán el seis de agosto por el teniente coronel Seguí a Franco:

En el plan primitivo que contemplábamos en la época de preparación de Movimiento se pensaba en partir de Sevilla

como base, para ir, motorizados y rehuyendo el combate, por Mérida-Trujillo-Navalmoral y Talavera a cooperar a la caída de Madrid.¹⁰

Pero volvamos a la Sevilla de los días posteriores al 18 de julio. Ocupada la capital, se organizaron diversas columnas que partieron de inmediato en diversas direcciones. El duque de Medinaceli, Rafael Medina Villalonga, nos dejó la memoria de una de ellas, la que al mando de Ramón de Carranza, el nuevo alcalde colocado por Queipo, recorrió un buen número de pueblos de Sevilla y Huelva nombrando nuevas autoridades, organizando las pautas represivas y, de paso, revisando el estado de sus propiedades.¹¹ Cuando esta columna se adentró por tierras del condado onubense, se emprendieron desde Sevilla las primeras operaciones militares contra los pueblos con columnas formadas por fuerzas militares, Asalto, Guardia Civil, Regulares y los grupos paramilitares de Falange y Requeté. Antes de partir para Extremadura, las fuerzas de Castejón, por ejemplo, intervinieron en la ocupación del Aljarafe sevillano, del condado y de núcleos de la importancia de Arahal, Morón de la Frontera, Osuna, Estepa, Huelva, Ayamonte y Puente Genil.¹² Las instrucciones que llevaban estas primeras columnas se recogieron por escrito a finales de julio y, en ellas, además de todo lo referente a la liberación de presos, nombramiento de gestores, aprovisionamiento de armas y víveres, y restablecimiento de comunicaciones, se especificaba la obligación de efectuar «un minucioso registro en los domicilios de todos los dirigentes y afiliados al Frente Popular, aplicando el bando del Estado de Guerra al que se le encuentren armas», indicándose además que «se extremará la energía en la represión, sobre todo en aquellos individuos que se consideren peligrosos y de acción, los que hayan empuñado las armas contra la fuerza pública, o los que hayan cometido desmanes».¹³

La preparación de la ruta hacia Madrid se inició pronto. Pueblos como Las Pajanosas, Guillena, Gerena, El Garrobo

o Burguillos pasaron de inmediato a manos de los sublevados. Por **Guillena** y **Burguillos**, por ejemplo, vemos el 26 de julio, en un descanso entre la toma de Pilas y Bollullos del Condado, a Carranza, que probablemente seguía comprobando el estado de su patrimonio o el de sus amigos, todos ellos sabedores de que el abastecimiento de la población se había estado haciendo a su costa. Los pueblos situados a la izquierda de la carretera general, **Gerena** y **El Garrobo**, fueron ocupados a finales de julio por una columna al mando del brigada de la Guardia Civil Juan Ruiz Calderón. Para garantizar aún más la seguridad de las columnas, el día siguiente de su partida, el tres de agosto, se envió una potente columna al mando del comandante de la Guardia Civil Santiago Garrigós Bernabeu contra **Castilblanco de los Arroyos**. «Un pueblo más ganado a la Causa Nacional. Viva España», escribió Garrigós a Cuesta Monereo. Los izquierdistas de este pueblo, después de intentar ocupar infructuosamente el cuartel de la Guardia Civil, huyeron hacia el norte antes de que llegara la columna. En todos estos pueblos hubo detenciones de derechistas e incautaciones de víveres, pero en ninguno de ellos se derramó sangre.

El fortalecimiento de los flancos de la ruta que había de seguir la columna Madrid se completaría entre el cinco y el 21 de agosto —ya con columnas en toda regla— con la ocupación de Almadén de la Plata, El Pedroso, Constantina, Cazalla, Alanís, San Nicolás del Puerto, Guadalcanal, Navas de la Concepción y Fuente del Arco, cerca de Llerena. Estas operaciones se vieron completadas por otras similares realizadas en Huelva por diversas columnas, y en el sur de Badajoz por el grupo del capitán de la Guardia Civil Ernesto Navarrete Alcal, que forma su columna en Fuente de Cantos con guardias civiles, falangistas y voluntarios. Entre las operaciones realizadas en Huelva hay que destacar por su importancia las que a mediados de agosto se efectuaron sobre Castillo de las Guardas y Aznalcóllar, por fuerzas al mando del comandante de Infantería Antonio Álvarez Rementería; y sobre la Sierra de Aracena, por una gran colum-

na al mando del comandante retirado Luis Redondo García. Estas dos columnas, acompañadas de otra que partió desde Valverde del Camino, serían las que confluirían a partir del día 25 de agosto en la ocupación definitiva de la temida cuenca minera onubense. De esta forma se garantizó la seguridad del grupo principal, además de asegurarse el contacto permanente por ferrocarril entre Sevilla y la columna Madrid, y la comunicación por Portugal entre los sublevados del norte y los del sur cuando aún los separaba la provincia de Badajoz.

El día primero de agosto, en Tetuán y a las catorce horas, Franco dictó la Orden General de Operaciones n.º 1 del Ejército de África y del Sur de España. En ella se describía el objetivo principal de la columna, avanzar hacia Zafra y Mérida; y los objetivos secundarios, prestar ayuda a los puestos de la Guardia Civil que resistan y combatir, «dispersándolas y castigándolas», las concentraciones enemigas próximas a la columna. La exposición de la «Misión de la Columna» concluía así: «Alcanzando Mérida se establecerá enlace con Cáceres y [se] atenderá a la situación que conviene reducir de Badajoz asegurando su dominación».¹⁴ Esto quiere decir, frente a lo que se ha mantenido en ocasiones —pensemos por ejemplo que Martínez Bande llegó al extremo de eliminar lo que seguía a la palabra situación—, que la ocupación de Badajoz estaba ya prevista desde antes de que la columna iniciara la marcha. Es posible que el entonces coronel Juan Manuel Martínez Bande decidiera eliminar esas palabras para ajustar las instrucciones de Franco a su tesis de que la toma de Badajoz se decidió sobre la marcha. Pensaba el coronel que «la orden de marchar audazmente sobre Madrid debe ser estimada como hija de una fe sólida en el triunfo y un [*sic*] conocimiento exacto del enemigo». Esta retórica ampulosa que remite en sus conceptos —fe, triunfo y enemigo— a una guerra convencional, se desinfla por sí sola si se piensa en la realidad: fuerzas militares de choque sublevadas atravesando un territorio donde casi como único enemigo sólo tienen a la población civil.¹⁵

Sobre las «Modalidades de ejecución de la misión» la orden destacaba que «la característica del avance ha de ser la rapidez, la decisión y la energía evitando toda detención no imprescindible». En esta orden ya se hablaba de una segunda columna que habría de asegurar la comunicación de la primera con el punto de salida. Sobre el modo de actuar se decía: «En cuanto a la reducción de focos rebeldes se efectuarán con energía excluyendo la crueldad, respetando en absoluto a mujeres y niños y evitando toda clase de razias». Aunque ya de por sí resulte alarmante la advertencia sobre el respeto a mujeres y niños o sobre la crueldad, estas órdenes se vieron superadas por la realidad desde el primer momento, pudiendo afirmarse sin duda alguna que todos los pueblos y ciudades ocupados por estas fuerzas quedaron marcados, y que la crueldad y las razias fueron recurso corriente. El mismo biógrafo de Yagüe, Juan José Calleja, dijo claramente que «los africanistas tenían la consigna de propinar a las crueles turbas un mazazo rotundo y seco que las dejase inmóviles al atravesar ese territorio que aún se desangraba bajo el efecto de espeluznantes crímenes».¹⁶ En cuanto a las mujeres y niños no sólo serían utilizados como escudo cuando convenía, como en la toma del barrio de La Macarena, sino que fueron con frecuencia las primeras víctimas de la violencia aparatosa e incontrolada de los primeros momentos tras la ocupación de cada lugar. El contraste entre lo que se recomendaba en las instrucciones, mostradas a veces como prueba de la prudencia y comedimiento con que actuaron los golpistas, y lo que sabemos que se hacía en la realidad, debería servir de aviso para valorar la documentación generada por quienes habían decidido acabar violentamente con un sistema político legal.

La composición de la columna se decidió en Sevilla y ya se mencionaba en la Orden el apoyo que desde el aeródromo de Tablada debería prestarse a la columna. Lo cierto es que desde fecha muy temprana Franco había previsto ocupar la ciudad de Badajoz antes de seguir la ruta hacia Madrid, es decir, que ya sabía el tipo de guerra que iba a hacer,

lo que indudablemente se debe —en palabras de Paul Preston— a «su obsesión por el aniquilamiento de toda oposición» con la finalidad de consolidar su supremacía política.¹⁷ El modelo de guerra que Franco llevaría a efecto, una guerra de exterminio, tendría su prolongación y su equivalente en el tipo de política aplicada en cada localidad, una política de exterminio. Aunque los golpistas procuraron que la planificación de la muerte no quedara reflejada en los documentos son las propias instrucciones de Mola las que la demuestran. Así, la hasta ahora desconocida instrucción del 30 de junio, relativa a Marruecos, estableció en su punto *q*: «Eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.».¹⁸

Probablemente el día 29 de julio por la alusión a Huelva —«reacciona a nuestro lado» quiere decir que fue ocupada ese día por los legionarios de Vierna—, Franco manda a Mola el siguiente mensaje, rayano en la euforia:

Se consolida la situación Andalucía. Huelva reacciona a nuestro lado. Se intensifica transporte. Situación internacional mejorada. Comisión control consiguió expulsar escuadra Tánger. Hoy llegó primer avión transporte, seguirán llegando dos cada día hasta veinte, también espero seis cazas y veinte ametralladoras. Somos los amos. Viva España.

Tres días después, el primero de agosto, Franco envió a Mola varios comunicados en los que aparte de exponerle los problemas que tenía para pasar sus fuerzas a la Península —lo que se solucionó entre ese día y el siguiente—, le planteaba la falta de calidad del material disponible. En el primero de ellos, en el que le pedía que le indicara un lugar donde entregarle dos millones de cartuchos, Franco afirmaba que pensaba «abrir comunicación Sevilla-Cáceres lo más rápidamente. Tenemos comunicación Sevilla-Ayamonte. Si Portugal acepta podríamos efectuarlo a través de Portugal». En un segundo comunicado, Franco, agobiado por la lentitud del transporte de sus fuerzas al territorio peninsular, co-

mentaba el avance de las fuerzas que se encontraban ya en Andalucía. El mensaje concluía: «Espero poder iniciar domingo 2 avance con algunas fuerzas». En un mensaje posterior se exponía más extensamente la misión de dicha columna, que debería partir en la madrugada del lunes día tres. A esta columna le seguirían otras columnas que, una vez contactasen con las fuerzas de Mola, avanzarían hacia Talavera de la Reina en dirección a Madrid. Un nuevo mensaje mostraba hasta qué punto iba mejorando el estado de ánimo de Franco a medida que la ayuda extranjera se concretaba:

Recibo noticia persona llegada de Madrid el martes 28 grandísima desmoralización millares bajas, Gobierno aterrado, reciben víveres Valencia, ya reina el hambre, extranjeros evacuan Madrid. Mantenerse firmes seguro triunfo. Con pesetas papel banco podemos arreglarnos, obteniendo algún crédito extranjero, haciendo hipotecas sobre fincas, casas, puertos. Extranjeros nos ayudan por propio interés.¹⁹

La columna Madrid inicia la marcha

El domingo dos de agosto a las ocho de la tarde partió de Sevilla la Agrupación n.º 1 del teniente coronel Carlos Asensio Cabanillas, quien había recibido la orden de tomar el mando de la columna el día anterior en Melilla. Estaba compuesta por el II Tabor de Regulares de Tetuán (comandante Antonio Oro), la IV Bandera del Tercio (comandante José Vierna), dos autoametralladoras, una batería de 70 mm, una Compañía de Zapadores y otros servicios. Ésta es la columna que el coronel Martínez Bande consideró «endeble» y «pobre de medios». ²⁰ Su objetivo era tomar Mérida y contactar con las fuerzas de Mola, para quien llevaba siete millones de cartuchos, en el menor tiempo posible. ²¹ Con estas fuerzas y sabiendo que detrás le seguiría otra columna de similares características, salieron de la ciudad a la caída de la tarde en coches y camiones. Los izquierdistas de **El Ronqui-**

llo, antes de emprender la huida y cuando conocían la cercanía de las fuerzas mercenarias,²² volaron los puentes del Rivera del Huerva, a unos siete kilómetros del pueblo, el de la carretera del Castillo de las Guardas, el de Almadén y una alcantarilla llamada Hombre Muerto. De esta forma, cuando las fuerzas de Asensio llegaron sobre la una de la noche al primer puente mencionado, cerca de la venta del Alto, hubieron de detenerse, aunque una vanguardia compuesta por dos compañías de Regulares se acercó hasta el pueblo adueñándose de él tras vencer cierta resistencia que causó a los ocupantes un único herido del 2.º Tabor de Regulares de Tetuán. El arreglo del puente retrasó a la columna doce horas, pero sólo unos kilómetros más adelante otra alcantarilla destruida acarreó un nuevo parón de seis horas. Los daños producidos al intentar avanzar por caminos vecinales afectaron a cuatro camiones y a un camión-cisterna de carburante. Una vez en El Ronquillo, Asensio, sobre las seis de la tarde, nombró una comisión gestora, organizó la guardia cívica y pidió explicaciones al cabo de la Guardia Civil por no haber evitado las voladuras con sus seis guardias.

Este mismo tres de agosto Franco pudo comunicar a Mola la salida de la columna y sus primeros tropiezos, disipados en la gran noticia de que al día siguiente tendría solucionada la «cuestión escuadra». Otro motivo de ánimo fue la noticia dada por Mola de que unos trescientos guardias civiles que habían sido enviados el día primero en tren desde Badajoz a Madrid se habían pasado ese día a los sublevados en Miajadas. Un comunicado de Franco a Mola del día tres presenta la siguiente situación:

Ayer domingo salió columna Sevilla dirección Badajoz que facilitará comunicación. Tan pronto como tengamos aviones nuevos en vuelo esperamos destruir o anular escuadra y llevar a cabo acción intensa sobre Madrid. ... Berlín avisado de nuestra identificación lo reiteraré. Suspicias debidas a trabajos paralelos. Estoy relación íntima Alema-

nia Italia. Hoy ofrecen de Inglaterra, desconozco estado ... aparatos ... Éstos entrega pago contado. Hecho pago Londres volarían a ésa. Aquí no nos convienen. Díganme si le interesan y disponen divisas.²³

También ese día tres, sólo unas horas más tarde, salió del Parque de María Luisa la Agrupación n.º 2 de la columna Madrid, dirigida por el comandante Antonio Castejón Espinosa: «Más de cien camiones y muchos coches ligeros», según Sánchez del Arco, quien acompañaba al militar junto con el marqués de Nervión y Javier Parladé. Dicha columna, que avanzó en la noche con los faros apagados, estaba constituida por la V Bandera al mando de Castejón, el II Tabor de Regulares de Ceuta (comandante Rodrigo Amador de los Ríos) y carros de Asalto además de diversos grupos de Artillería, Infantería, Intendencia, Sanidad e Ingenieros. Cuando a la mañana siguiente Castejón, después de varias paradas, pasó en su coche por El Ronquillo los trapos blancos ondeaban aún en los balcones.

Asensio entró en **Santa Olalla** sobre las diez treinta de la noche del día tres. Nada más llegar tuvo noticia de que una columna enemiga formada por unos veinte camiones se dirigía desde Monesterio a Santa Olalla. Entonces ordenó que la vanguardia se adelantara unos seis kilómetros hacia Monesterio para evitar cualquier sorpresa. Con tal motivo se produjeron dos enfrentamientos cerca de la venta del Culebrín con un resultado que se convertiría habitual para los milicianos: catorce muertos y un herido en medio de la desbandada general. Escopetas de caza, hachas y palos, cuando no armas de museo, contra las fuerzas de choque del Ejército español. Para asegurar los flancos Asensio decidió pernoctar allí y enviar fuerzas contra Cala y el Real de la Jara. En **Cala** entraron, como en tantos pueblos, sin oposición alguna. La gente había huido al campo. Atrás quedaba el intento frustrado de asalto al cuartel de la Guardia Civil y el saqueo del edificio ya vacío cuando los guardias partieron a Santa Olalla. En **El Real de la Jara**, como en todos si-

tios, se detuvo a los derechistas más señalados, y se creó un economato que durante dos semanas repartió alimentos entre la población. En su brutal entrada, los regulares que al mando de un alférez constituían la vanguardia de la columna de Castejón, con el pretexto de que se les había preparado una emboscada, causaron dos muertos entre los vecinos. Luego dejaron veinte fusiles para los derechistas y se volvieron para Santa Olalla. Ya en la madrugada del día cuatro, Castejón dividió sus fuerzas en dos columnas: la primera —con el Tabor, una sección de Artillería, otra de puentes y un blindado— siguió para Monesterio; y la segunda —con la Bandera, otra sección de Artillería, puentes y la Guardia Civil de Llerena— fue enviada contra Llerena. La vanguardia de ambas columnas siempre fueron los regulares.

Franco, por su parte, estaba ya más tranquilo. En su comunicado del día cuatro de agosto a Mola podía leerse:

Columna salida ayer avanza seguida otro convoy municiones, total 2 banderas, 2 Tabores, con Art^a y servicios. Confío lograr pasar Estrecho mañana otras unidades que seguirán [a las] primeras. Me dice Gil Robles [desde] Lisboa dispone de 8.000.000 pesetas en divisas [a] nuestra disposición. Material que yo adquiero no me apuran pago. Espero poderte prestar muy pronto poderosa ayuda aérea. Empezando a recoger frutos intensísimo trabajo venciendo los grandes obstáculos acumulados. Tengo noticias que Guardia Civil que está con enemigo espera ocasión para sumársenos en todas partes y que situación en campo enemigo muy desmoralizada.²⁴

En el camino hacia **Monesterio**, la vanguardia de Asensio, el II Tabor de Regulares de Tetuán, tuvo un encuentro con un numeroso grupo de milicianos (trescientos o cuatrocientos) llegados en camiones desde Badajoz, a los que causó un total de 34 muertos. Los regulares tuvieron tres heridos, uno en El Real de la Jara y otro en Monesterio. El parte que Asensio envió a Franco una vez que entró en el pueblo a mediodía del cuatro decía: «En Monesterio se procedió a las

operaciones de limpieza y las conducentes a la normalidad dispuestas por V.S.». ²⁵ Asensio fue informado del asalto al cuartel —causante de la muerte del guardia civil Francisco Gragera Martínez, de veintiún años, y de tres paisanos el día 19 de julio—, de la destrucción del interior de la parroquia y de la detención de varias personas a partir del día 26 de julio. Se responsabilizó de estos hechos a Antonio Barbecho Gómez, Juan Catalán Sayago, Antonio Aceitón Riscos y Manuel Carrasco Florido. No obstante, incluso Tadeo Cantillo Carballar, uno de los derechistas presos, comunicaría unos años después, ya en funciones de alcalde, al juez instructor de la Causa General que «los malos tratos que ejercieron los marxistas con los detenidos fueron solamente de palabra, así como insultos y amenazas de muerte». A la inevitable pregunta sobre el número de víctimas causadas por la «horda marxista», Cantillo respondió que ninguna, «sin duda por el corto período de tiempo que estuvo este pueblo dominado por los rojos». ²⁶ Lo cierto es que las autoridades frentepopulistas, antes de partir hacia Badajoz o hacia la Sierra Machado cuando ya las fuerzas de Asensio rozaban el pueblo, pusieron en libertad a todos los presos. ¿Qué había ocurrido realmente en Monesterio? Es la propia Causa General la que nos informa de que fue la Guardia Civil la que en la mañana del día 19 abrió fuego contra un coche, con varios izquierdistas, que se acercó al cuartelillo, lo que provocó una situación de abierto enfrentamiento con el vecindario —que motivó las cuatro muertes mencionadas— y la llegada en ayuda de la Guardia Civil de varios números de Fuente de Cantos. ²⁷ El día 25 de julio toda la Guardia Civil del partido fue concentrada en esta última ciudad.

Monesterio fue el primer pueblo de la ruta en que los sublevados pudieron informarse de la estrategia defensiva de las autoridades republicanas. Lo primero que se creó —como en todo el territorio donde imperó la legalidad y siguiendo las instrucciones del Gobierno Civil y del Comité Provincial del Frente Popular— fue el Comité del Frente Popular, con representantes de todos los partidos que lo formaban y que, a

través del Comité de Enlace, era quien decidía en cada localidad todo, desde registros y detenciones hasta abastecimientos. Las reuniones fueron presididas por los alcaldes. El primer acuerdo de estos comités fue la condena del golpe militar o, como dijeron en muchos pueblos, el movimiento subversivo perpetrado por la reacción y el fascismo contra el gobierno legítimo de la República. Todas las detenciones practicadas a partir del 18 de julio tuvieron su origen en el bando publicado ese mismo día por el gobernador Miguel Granados, y que, al amparo del estado de alarma, instaba a la detención y registro domiciliario de personas sospechosas y a controlar todo tipo de alteración de cualquier procedencia. Este comité, que representaba a republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas, estuvo compuesto por Elías Torres Lorenzo, Manuel Garrote Catalán, Gregorio Vasco Muñoz y Basilio Bautista Morales. En un segundo nivel estaba el Comité de Guerra, encargado de vigilancia y armamento, y que lo constituían Joaquín Franco Soria, Justo Naranjo Granadero, Eduardo Martínez Megía y José Garrote Delgado. Finalmente estaba el Comité de Enlace, cuya misión era conocer la situación en los pueblos cercanos e indagar la situación del enemigo. Sus miembros eran Antonio García Villalba, Julián Megía Neguillo y Manuel Chaves Crisóstomo. Aunque más tarde se sabrá su destino, cabe anticipar que de estas once personas, bajo cuya responsabilidad estuvieron los 51 presos de derechas, sólo salvaron la vida dos. González Ortín también citó en su *Extremadura bajo la influencia soviética* al maestro Miguel Díaz Acosta y a Manuela Campano Bayón, igualmente asesinados posteriormente.

Castejón en Llerena

El día cuatro, en que se ocupó Monesterio, entre las diversas informaciones procedentes de provincias llegadas al Servicio de Información del Estado Mayor del Ministerio de la Guerra, se recibió una de **Llerena** que decía:

Comité Frente Popular comunica que se hacen impresionables medidas rápidas Gobierno para impedir avance fuerzas facciosas; de no proceder toda rapidez se corre el riesgo de perder la provincia de Badajoz. Enemigo dispone excelente pertrecho guerra habiendo conquistado varios pueblos dicha provincia.²⁸

Ese mismo día la Guardia Civil —cien guardias al mando de los oficiales Antonio Miranda Vega²⁹ y Manuel López Verdasco,³⁰ entre los que se encontraban los de Azuaga y los 25 que desde Zafra habían sido trasladados a esa ciudad en los primeros días del golpe al mando del capitán Manuel Luengo Muñoz— decidió salir del pueblo y dirigirse hacia la carretera general a unirse con las columnas. Para ello hicieron creer a las autoridades civiles que no sólo seguían fieles a la República sino que estaban dispuestos a luchar contra las fuerzas que subían desde Sevilla. Según parece, Miranda reunió a los guardias y les dijo:

Por dos veces he recibido órdenes del Gobierno Civil de Badajoz de marcharme a Madrid con ustedes para ponernos al lado del mal llamado Gobierno legítimo de la República; yo no he querido obedecer, y recibo nuevas órdenes para que haga entrega del mando y armamento; tampoco obedezco; conozco perfectamente los caracteres de este movimiento y no cumplo esas órdenes; ustedes podéis hacer lo que queráis, ya sois mayores; el asunto es bastante delicado; podéis, pues, daros buena cuenta de la responsabilidad que con cualquiera de vuestra decisión podéis echaros encima.³¹

Las autoridades de Llerena, conscientes de que la ciudad sería objetivo prioritario de los golpistas por su situación geográfica, tenían razones para preocuparse, pese a lo cual decidieron sumarse a la iniciativa y enfrentarse a lo que viniera, enviando a un grupo de milicianos al mando del alcalde Rafael Maltrana Galán. Pero al llegar al llamado Puente de la Ribera, que debía ser destruido, el teniente Miranda desarmó a los milicianos y se los llevó consigo hacia

la carretera general, donde a media tarde contactó con las fuerzas de Castejón. Lo primero que hizo éste fue acabar de inmediato con la vida de los milicianos entregados por Miranda. «En ellos se cumple la ley de guerra y la noche serrana se ilumina con unos fogonazos», escribió el periodista sevillano Sánchez del Arco.³² Uno de los que había podido huir cuando fueron detenidos fue el alcalde Maltrana, que volvió de nuevo a Llerena. Otro grupo de milicianos, que fue enviado al día siguiente a destruir el puente, se encontró con la columna de Castejón.

Como ocurrió en tantos otros pueblos, muchos vecinos huyeron ante las expectativas que se presentaban. Alguien, que más tarde sería capturado y sometido a consejo de guerra en 1937, declaró que huyó de Llerena por haber escuchado «que vienen los fascistas y a los hombres les cortan la cabeza».³³ En su recorrido hacia Llerena, Castejón acabó con varios grupos que intentaron frenar el avance de su columna: treinta personas procedentes de esa ciudad, los quince que intentaron volar el puente y un grupo de Guadalcanal a los que causó cuatro muertos y seis heridos. Otro hecho que muestra el tipo de guerra que se estaba desarrollando fue el ocurrido cerca de la ciudad, cuando el jornalero Ramón Franco Escudero «Boquineto», armado con una vieja escopeta de pistón, pretendió hacer frente al tanque que abría la columna antes de que un proyectil de dicha máquina lo fulminara. Castejón actuó como solía. Primero cañoneó y luego, cuando comprobó que la resistencia se concentraba en el ayuntamiento, la iglesia, el grupo escolar y la Huerta de la Pava, con los defensores bien pertrechados de dinamita, ordenó incendiar diversos sectores, ante lo cual el comité decidió rendirse. De poco sirvió, ya que el ayuntamiento fue tomado seguidamente por las fuerzas de Castejón con granadas de mano y a la bayoneta, y perecieron todas las personas que se encontraban allí. Como unos cuantos persistieron desde la torre en su resistencia, Castejón cañoneó algunas puertas de la iglesia y luego le prendió fuego, destruyendo el edificio con los hombres dentro. Es-

tos daños, por supuesto, superaron los causados previamente por la furia iconoclasta. Los ocupantes tuvieron dos muertos y doce heridos; los defensores, que no llegaron a rendirse, ciento cincuenta muertos.³⁴ En el transcurso de estas acciones un trimotor gubernamental bombardeó el convoy de Castejón inutilizando varios camiones e hiriendo a tres personas, una de las cuales murió después. He aquí —según la transcripción de las charlas que hacía la prensa sevillana— cómo transmitió aquella experiencia el propio Castejón a Queipo:

Acerquéme sobre Llerena, y no obstante ser cañoneada ofreció resistencia, refugiándose gente en la iglesia y ayuntamiento, lanzando grandes cantidades de dinamita, que me obligaron a incendiar alrededores del pueblo, consiguiendo rendición Comité completo.

La entrada de los regulares en el pueblo causó tres muertes que fueron adjudicadas a los izquierdistas. Éste fue el caso de Manuel Morín Gómez, un industrial de sesenta y un años; Blas Muñoz Herrera, de cincuenta y cuatro, y José Tena Chaparro, de treinta y cinco, ambos labradores.³⁵ Los ocupantes se encontraron con lo de siempre: varios cortijos y casas saqueadas —especialmente los de Jesús Ugalde y Fernando Zambrano Alday, sede de Acción Popular— y los presos con vida. Algunos de los indicados, como Zambrano Alday, y otros como Natividad Maesso Candalija, Mariana Jaraquemada, Evaristo de la Riva, Secundino Mateos, la condesa de Rojas o Mariana y Antonia Zambrano, se habían desplazado a Sevilla o a Portugal antes del golpe.³⁶ Sin embargo, pese a la oposición de las autoridades de Llerena —«a pesar de haberse negado éste [el responsable del Depósito Municipal] a entregarlos», se lee en la Causa General— un grupo de Azuaga consiguió llevarse a Hilario Molina Pérez y Gonzalo Cabezas, asesinados a principios de agosto. Del trato dado a los presos fueron responsabilizados Juan Navas Llorente, Rafael García Gobante, José Ara-

gón y José Mera, todos ellos asesinados; como máximos responsables fueron acusados Pedro Corraliza Peguero, Zacarías Lancharro Muñoz, Secundino Marín Agenjo, Blas Chaves del Socorro, David Enamorado y Rafael Maltrana Galán.³⁷ El número de personas movilizadas en Llerena y su partido contra los sublevados desde la inmediata declaración de huelga general el 18 de julio fue de unas seis mil; sus armas, escopetas de caza, pistolas, sables, navajas y dinamita. Antes de la llegada de Castejón un grupo numeroso marchó a pie por Ahillones, Berlanga, Azuaga, Granja y Fuente Obejuna hasta llegar a Pueblonuevo del Terrible, desde donde un tren los llevó a Ciudad Real y a Madrid, a la que llegaron el 27 de septiembre; otros muchos se quedaron en la Extremadura republicana. Los que no salieron a tiempo cayeron en manos de Castejón, una de cuyas obsesiones era evitar cualquier fuga una vez que se ocupaba una localidad. Muchos de los llegados a Madrid formaron parte del Batallón «Nicolás de Pablo», creado por iniciativa de Rafael Maltrana Galán y que tomaría parte en las operaciones en torno a Pozoblanco en marzo de 1937.³⁸ Antes de partir, Castejón dejó al mando de la gestora al teniente Julio Burguño Cortés, que se encontraba allí de vacaciones.³⁹ De la huella dejada por Castejón en el pueblo daría cuenta incluso gente de su propio bando, como el teniente González Toro, quien al pasar en octubre por allí le llamó enormemente la atención «las mujeres enlutadas y tristes, que son un exponente de la ola de luto que invade España y que nos indica que en Llerena, como en todas partes, ha pasado algo».⁴⁰ El testimonio adquiere más valor si se tiene en cuenta a qué se dedicaba González Toro según sus propias palabras:

Pertenecer a una columna de limpieza es triste y poco brillante. Sólo mitiga esta tristeza el convencimiento de la necesidad de nuestra misión y el noble agrado con que en todas partes se nos recibe y que nosotros, desterrados forzosos de nuestros hogares, tanto agradecemos.⁴¹

Objeto de la atención de gubernamentales y golpistas fue la línea férrea que nacía entre Fuente del Arco y Llerena y que vía Azuaga comunicaba con Peñarroya. Fue vigilada estrechamente por los sublevados en previsión de ataques e incursiones y bombardeada por la aviación republicana el día 15 de agosto. Algunos informes oficiales indican que este ataque supuso un intento republicano de reconquistar Llerena. Un comunicado de la Guardia Civil al Cuartel General de Franco en la mañana del 15 informaba de que:

Llerena había sido bombardeada produciendo víctimas y daños materiales de importancia. A 8 o 10 kilómetros se ven los grupos de camiones ocupados con rojos con fusiles y ametralladoras. Muchos de ellos con uniformes de Guardia Civil, Carabineros y Asalto, pero se ignora si efectivamente lo son. Dicen que el propósito es tomar el pueblo a mediodía y que es urgente el envío de refuerzos.

Desde el Cuartel General se animó a que resistieran ante los que «seguramente serían marxistas disfrazados» y se informó de que recibirían ayuda de inmediato. Efectivamente, la columna fue destrozada por la aviación sublevada antes de que llegara a la ciudad.⁴² Por otra parte, el 17 de agosto fue trasladado desde Los Santos a Llerena el comandante Francisco Delgado Serrano,⁴³ al mando de una Compañía de Infantería para relevar a los regulares de Alhucemas, enviándose al mismo tiempo a Los Santos un Tabor de regulares que, procedente de Guadalcanal, había intervenido en la ocupación de Fuente del Arco. También desde Sevilla se mandó otro grupo de unos cien hombres a Llerena. Todos estos movimientos tendían a frenar cualquier iniciativa que viniera del sector Azuaga-Berlanga-Granja y a garantizar en todo momento el tráfico por ferrocarril entre Sevilla y Mérida, básico para la estrategia de los golpistas y razón, en definitiva, por la que Llerena había sido tomada previamente.

Muchas de las autoridades huidas de Llerena se sumaron a la columna Cartón —doce camiones, cuatro coches y un

número de hombres difícil de cuantificar—, procedente de Castuera, y que, según algunas fuentes, iba al mando del capitán Sediles y del teniente Victoriano Molina Esquivel. Esta columna tomó por base Azuaga e intentaría nuevamente el día 31 de agosto recuperar Llerena. La acción comenzó a gestarse desde el instante mismo de la huida y fue controlada en todo momento por los ocupantes de Llerena que, temerosos de cualquier iniciativa que partiera de Azuaga, nunca perdieron de vista aquel frente. Recelosos de encontrar un enemigo fuerte, optaron el día doce por ocupar **Llera y Valencia de las Torres**, lo que consiguieron sin dificultad alguna enviando a los regulares y causando entre el vecindario tres muertos y un herido en el primero y cinco en el segundo.⁴⁴ Días antes, uno de los derechistas presos de Llera, el propietario Rafael de la Gala Rodríguez, de cuarenta y seis años, había sido llevado a Valencia de las Torres, donde fue brutalmente asesinado. Tres días después de la ocupación, el 15 de agosto, se presentó una columna procedente de Azuaga y recuperó el pueblo de nuevo sin que el pequeño retén allí dejado ni las derechas armadas pudieran hacer nada. Cuando se retiraban, cayó en poder de los milicianos el falangista Rafael Fernández Pilar, que fue eliminado de inmediato. González Ortín menciona entre los dirigentes al alcalde Francisco Campos Castaño y a Antonio González Martínez, Juan Acedo Barragán y Antonio Abad López «el del Preso», dos de los cuales, Campos y Acedo, serían finalmente ejecutados en 1940. Pese a todo, desde el Cuartel General de Franco no se consideró oportuno ocupar Azuaga en momentos en que eran Mérida y Badajoz las que centraban toda su atención. En el ataque a Llerena los republicanos utilizaron tres piezas de Artillería y carros de Asalto, y se llegó a ocupar el barrio de las Ollerías. Puesto que hubo parte de la población que ayudó con sus disparos a quienes intentaban entrar, se practicaron numerosos registros. Los sublevados, que contaban con fuerzas de Infantería, Guardia Civil y Falange, requirieron finalmente la ayuda de una Compañía de Regulares y de un Breguet en-

viado desde Tablada, que bombardeó y ametralló a placer a la columna hasta provocar su retirada, mientras que los regulares se encargaron de los rezagados. Es decir, que en cuestión de poco tiempo y dada la gravedad del asunto, reunieron sin problemas una fuerza considerable —sobre todo regulares— procedente de Mérida, Zafra, Badajoz y Sevilla.

Las bajas de la columna Cartón no se conocen; las contrarias tuvieron tres.⁴⁵ Las fuerzas de Infantería ocuparon a los republicanos un blindado. En el lugar de la carretera donde fueron bombardeados, a unos once kilómetros de Llerena, también dejaron varios barriles de vino, cuarenta jamones, garbanzos, arroz y aceite. Según el informe del comandante Amador de los Ríos, que se acercó al lugar con sus regulares con intención de atraparles, iban ya adelantados, incendiando cuanto encontraban a su paso para dificultar la persecución:

Quedaron en nuestro poder algunos muertos, un carro de asalto del Regimiento de Carros n.º 1 y algunas municiones. Había soldados pertenecientes a los batallones llamados «Pedro Rubio»⁴⁶ y «Adolfo Bravo», iban bien uniformados y las municiones eran de este año.⁴⁷

Los presos —se habla de tres y de siete según los documentos— declararon que iban mandados por Sediles, el diputado Sosa y el alcalde Maltrana. Contamos también con el testimonio de uno de los militares allí desplazados para la defensa de la población:

Pronto entramos en contacto con el enemigo y más pronto aún emprende la huida dejando en nuestro poder varios muertos, entre ellos el jefe de la columna, un oficial de marina, cuyas tres estrellas doradas que ostentaba sobre el pecho se las coloca en el gorro nuestro capitán Blond. Abandona el enemigo, además de sus muertos, municiones, víveres, dos camillas y un hermoso carro de combate, completamente lleno de municiones y provisto de una potente ametralladora.⁴⁸

El comunicado de Cañizares a Franco fue, como siempre, más explícito: « ... que al llegar a Llerena entabló contacto con el enemigo, le hizo huir produciéndole numerosas bajas, cogiendo muertos y siete prisioneros que han sido fusilados». ⁴⁹

Finalmente el primero de septiembre, reforzada Llerena con un tabor y parte de otro, se ordenó desde el Estado Mayor de Franco la creación de una columna formada por tres compañías y una batería al mando de la Comandancia Militar de Llerena y con la misión de vigilar la línea férrea que comunicaba Llerena, Fuente del Arco, Guadalcanal y Alánís. ⁵⁰ Antes de que esto se llevara a efecto, el primero de septiembre, un avión republicano bombardeó Llerena y causó varios heridos y daños materiales. Esta posibilidad ya había sido prevista por un informe del capitán Cornide, quien aconsejó que se localizase el aeródromo de Azuaga y se inutilizaran sus aviones. ⁵¹

Fuente de Cantos, un caso inusual

Varias horas antes, a las tres de la noche del cinco de agosto, la columna de Asensio, con la IV Bandera en vanguardia, abandonó Monesterio en dirección a **Fuente de Cantos**, donde llegaron sobre las siete. Como no había resistencia alguna —en el pueblo apenas había quedado gente y los pocos que permanecieron habían huido a causa del bombardeo fascista del día cuatro de agosto, que causó tres muertos y un herido— y ya se sabía que desde Badajoz se habían enviado tropas a Los Santos de Maimona, la columna decidió seguir hacia dicho pueblo no sin antes realizar las rutinas habituales y dejar en la localidad, por orden del Estado Mayor de Franco, una compañía de regulares. Para todo ello se nombra como comandante militar al capitán de la Guardia Civil Ernesto Navarrete Alcal, que se había sumado al golpe en Sevilla —primero al servicio de Ramón de Carranza y luego al de Castejón y Asensio— y que por su conocimiento de la

zona se había encargado de designar a las nuevas autoridades. Una hora antes Franco había enviado a Asensio a través del general Queipo el siguiente mensaje:

Continúe avance dispuesto orden inicial activándolo en lo posible, llegado a Mérida depende de situación general ir sobre Badajoz o Talavera, noticias que adquiera sobre Badajoz y necesidades ayuda frente Madrid decidirán proyecto [de] encaminar otra columna mismo camino además de la de Castejón, que pueda detenerse sobre Badajoz.⁵²

La gravísima situación que se iba produciendo día a día no era desconocida en Madrid, donde ya esos días llegaban alarmantes llamadas de socorro del gobernador Granados solicitando aviones para la defensa de la capital y para atacar a los rebeldes, y artillería para repeler al enemigo.

Fuente de Cantos fue el primer pueblo de la ruta donde de manera excepcional, ya en la temprana fecha del 19 de julio, se produjeron hechos violentos en respuesta al golpe militar. Lo que empezó por las detenciones de rigor, concluyó en una matanza en la que, según parece y tal como reconoce incluso González Ortín en su *Extremadura bajo la influencia soviética*, jugaron un papel determinante los grupos armados de forasteros que desde el sábado 18 andaban de un pueblo a otro. Las detenciones comenzaron la misma noche del 18, cuando ya se conocía la dimensión de la sublevación. De entrada, y empezando por el juez de instrucción Francisco Herrera de Llera y su esposa Inocencia Chacón, fueron detenidas unas ochenta personas, obligadas a comparecer en el ayuntamiento ante el llamado Tribunal Revolucionario, que decidía si ingresaban en prisión o no. Mientras tanto fueron asaltados y destrozados el juzgado, la notaría, el registro de la propiedad, la comunidad de labradores y el convento. Los presos, cuyo número difiere según las fuentes, fueron divididos en dos grupos: uno, de unas doce personas, fue conducido a la prisión del partido; y otro, con unas 56, pasó directamente del ayuntamiento a la sacristía a la una de